

## POBREZAS DEL SINDICALISMO. ACERCAMIENTO A UN PANORAMA PESIMISTA DEL MOVIMIENTO OBRERO Y SUS POSIBILIDADES

RAÚL TREJO DELARBRE

Posiblemente, el movimiento obrero de nuestros días esté pagando sus primeras penitencias por las muchas faltas que cometió en el pasado. Sus dirigentes prefirieron siempre el acuerdo en las cúpulas antes que el despliegue de actitudes beligerantes; se acostumbraron a depender más del apoyo gubernamental que del apuntalamiento que podrían haber cultivado en sus propias bases; los sindicatos, en su mayoría, han tenido poca práctica en la defensa de sus derechos, confiados en que se mantuviera una política tutelar en su beneficio y sin ejercer atribuciones como la huelga. Ahora, cuando las condiciones económicas del país y las circunstancias políticas del grupo que gobierna han coincidido para que cambie la relación entre el régimen y los sindicatos, los dirigentes no pueden (y a menudo tampoco quieren) movilizar a los trabajadores, las demandas sindicales no pasan de ser reiteraciones tan conocidas como ineficaces, las condiciones de vida de los trabajadores y sus familias tienden a empeorar y no parece existir, a partir de la acción sindical posible en estos marcos, solución para sus problemas.

Para llegar a este panorama, que no es más pesimista que la situación general del país, tuvieron que pasar varias décadas de relación efectivamente cordial entre las burocracias sindicales y el gobierno. La posibilidad real de que algunos réditos del desarrollo se desparramaran entre los trabajadores fue el principal factor tanto para asegurar la estabilidad interna del sindicalismo como para acostumbrarlo a una escasa, cuando no inexistente, movilización. Con el advenimiento de la crisis a comienzos de los años setenta, la relación sindicatos-gobierno entró en tensión: hubo barruntos de pleito entre las cúpulas de la CTM y los nuevos gobernantes; la insurgencia obrera se perfilaba como alternativa al poder de los cacicazgos sindicales tradicionales, y se desplegaban nuevos sectores antaño alejados de las prácticas gremiales. Una nueva fase de concordia se garantiza gracias a la bonanza, pasajera pero deslumbrante, que trae el auge petrolero. Justamente en esos años, a fines de los setenta, comienza a forjarse el discurso de reformas para la economía que desde entonces reiteran dirigentes sindicales. Sin embargo, las demandas que parecían pertinentes para que el país aprovechara de manera racional sus riquezas de aquel entonces no son, necesariamente, las indispensables para los trabajadores, ni las posibles en las nuevas circunstancias que ha traído el empeoramiento de la crisis.

A esas dificultades hay que añadir los ajustes que han tenido lugar en el grupo gobernante para delinear el contorno en el que, contra su voluntad, se han hallado los dirigentes sindicales. Desde las cúpulas gubernamentales se ha otorgado más atención a las presiones foráneas o a los grupos privados que a los actores sociales que tradicionalmente han conferido legitimidad y sustento al Estado. En aras de mantener la capacidad de gobierno, se ha buscado administrar la crisis, pero no necesariamente resolverla. Con tal de mantener la capacidad de negociación con la banca internacional, se ha desdeñado la necesidad de negociar con las fuerzas sociales internas. Para el grupo que comenzó a gobernar en diciembre de 1982, el proverbial respaldo que habían otorgado los dirigentes

del sindicalismo tradicional parecía prescindible o, en todo caso, subordinado a otras prioridades. El manifiesto disgusto de Fidel Velázquez por la designación del candidato presidencial, un año antes, inició una era de fricciones, desatenciones y equívocos que todavía no concluye. Ante la preferencia del gobierno por posiciones conservadoras, y sobre todo frente al auge de la derecha electoral, los líderes sindicales han buscado erigirse como los defensores principales de la tradición histórica de la Revolución mexicana. Fidel Velázquez ha sentenciado —según Héctor Aguilar Camín—: “Nosotros los revolucionarios llegamos aquí a balazos. El que quiera quitarnos no podrá hacerlo con votos, tendrá que hacerlo a balazos también.”<sup>1</sup> Pero no ha sido a tiros de escopeta como a la dirigencia obrera se le ha soslayado de las principales decisiones. Ha sido a partir de una tozuda, a veces disimulada por la retórica, pero siempre constante indiferencia gubernamental ante las proposiciones de las burocracias de los sindicatos.

El proyecto de reformas económicas que comenzaron a postular en 1978 los dirigentes sindicales llegó tarde respecto a los ritmos que asumiría el sistema político del país. En aquel momento no había tiempo para cambios como los que allí se proponían, tan ocupados como estábamos todos en dilapidar primero, y en añorar después, la efímera riqueza petrolera. Luego, ese paquete de proposiciones, que son perfectamente congruentes con la tradición de reformas de la Revolución mexicana, tropezó con la desdicha de que esa tradición ya no determina como antaño las decisiones del poder y que aquellas reformas ya no son entendidas como indispensables por quienes gobiernan. El pacto social que había permitido el funcionamiento de la economía y la firmeza de la sociedad ha quedado macerado por la inclemente crisis. No tiene hoy puntos de referencia suficientes porque no existe un proyecto capaz de ser nacional, es decir, asumido por las principales fuerzas de la sociedad. De allí la pobre suerte con que han corrido las propuestas sindicales, que tienden a constituir, precisamente, un proyecto de nación.

No hay proyecto claro, ni posible en estas circunstancias, porque tampoco hay coincidencia sobre la manera de conducir al país. Hay discrepancias sobre las formas y las prioridades del gobierno. En palabras de Rolando Cordera: “Dentro del Estado mexicano domina casi de manera absoluta la idea de que lo importante es para quién (y para qué) se gobierna, mientras que la otra gran vertiente de la política del poder, la que tiene que ver con el cómo se gobierna, se mantiene subordinada.”<sup>2</sup> Los dirigentes sindicales, habituados a que se gobernara con (y a menudo para) ellos, han tenido que reconocer que las realidades cambian y han levantado y buscado perfeccionar entonces un discurso programático distinto al que se mantiene desde las esferas gubernamentales. Pero ante estas nuevas situaciones, el sindicalismo no ha tenido capacidad de cambiar. Hay un país diferente, equilibrios sociales nuevos y orientaciones gubernamentales también distintas. Pero no hay un nuevo movimiento obrero.

Por supuesto hay cambios en el movimiento sindical. El radicalismo de la insurgencia de los años setenta, y que todavía tuvo ánimos en el siguiente lustro, ha quedado virtualmente liquidado, ya sea por desgaste propio o, sobre todo, por hostilidad gubernamental. Hay grupos y organizaciones que lograron mantenerse, principalmente ligados a una oposición de izquierda que podría considerarse como “histórica” dentro del movimiento obrero, y que han buscado, con relativo éxito, nuevos espacios para desarrollarse. Esa oposición

<sup>1</sup> Héctor Aguilar Camín, “El canto del futuro”, en *Nexos*, núm. 100, abril de 1986, p.23.

<sup>2</sup> Rolando Cordera Campos, “El para qué y el para cómo del poder”, en *La Jornada*, 12 de diciembre de 1985.

sindical ha logrado alianzas con algunos sectores del sindicalismo nacional —como el Sindicato Mexicano de Electricistas— en foros de convergencia como la Mesa de Concertación Sindical, que a pesar de la diversidad de sus integrantes ha tenido una continuidad poco usual en los frentes obreros de carácter independiente. La burocracia sindical tradicional ya no ve con temor a esos grupos y organizaciones, pero tampoco les prodiga confianza alguna. Al mismo tiempo, grupos de discurso beligerante pero de actuación a menudo conciliadora, como la Unidad Obrera Independiente, se encuentran prácticamente apagados.

Otra novedad del sindicalismo es su virtual disminución, no sólo en términos de su fuerza política, sino de su alcance numérico. Si confiamos en datos de la CTM, el hecho de que estamos ante un desempleo de entre 11 y 17% significa no sólo más obreros sin empleo, sino también sindicatos con menos agremiados. Los dirigentes han asegurado que en tres años se perdieron cerca de dos millones de puestos de trabajo.<sup>3</sup> De ser así, los mismos dirigentes podrían encontrarse en el desempleo, al quedarse sin representados. (Si se considera que hace un par de años el número de sindicalizados era de aproximadamente cuatro millones, podemos encontrarnos ante un movimiento obrero significativamente debilitado.) Por otro lado, no parece que los sindicatos —empeñados como están, fundamentalmente, en resarcir los salarios y en conservar el empleo para sus actuales socios— hayan tenido interés, o capacidad, para crecer entre la vasta población de mexicanos no sindicalizados. En la defensa del empleo el movimiento sindical tendría una de sus mejores vetas, pero hasta ahora se ha resignado —y a veces incluso ha permanecido callado— ante el cierre de fuentes de trabajo. El Frente de Burócratas que varios centenares de despedidos del sector público organizaron hacia la mitad de 1985 no tuvo apoyo dentro del movimiento obrero institucional. Tampoco lo han tenido, en la medida en que lo necesitaban, grupos de despedidos como el de los metalúrgicos de la Fundidora de Monterrey.

Un sindicalismo en donde las bases tuvieran mayor voluntad o capacidad de presión ejercería, en tiempos de crisis aguda, demandas para detener el encarecimiento de la vida. Fundamentalmente, empleo y salarios habrían de ser, en esa circunstancia, obsesiones cotidianas para los trabajadores y sus dirigentes. Aquí no ha ocurrido con tal intensidad, porque la crisis ha venido a ejercer una suerte de efecto conservador en los sindicatos. Y peor aún, los ha llevado a abandonar espacios de confrontación y negociación, ante la poca eficacia de sus demandas. Ámbitos que habían servido para preparar y presionar, como la Comisión Nacional de Salarios Mínimos, han quedado relegados por la convicción, principalmente de la CTM, de que en estas circunstancias no sirven para nada. Los dirigentes obreros, en su afán por desplegar una política testimonial que deje constancia de su disgusto, recientemente ni siquiera han levantado demandas precisas en las revisiones semestrales de los salarios mínimos. La restitución de esos campos de negociación o la creación de otros supondría que el movimiento obrero se considera con fuerza suficiente para ganar algo y no sólo perder. Y requeriría que sus interlocutores admitieran que tiene beligerancia, que es un contrincante digno de tomarse en cuenta. Y parece que ni en las cúpulas patronales ni en las del gobierno existe esa convicción.

Las huelgas, numerosas e inusitadas, que el movimiento obrero estalló a mediados de 1983 fueron una prueba. El sindicalismo perdió, pues aunque se consiguieron pequeños aumentos salariales no fue aceptada su propuesta para establecer un compromiso nacional que abatiera la inflación. Pero también perdió uno de los principales recursos que tienen las

<sup>3</sup> Datos de la CTM en *La Jornada*, 21 de julio de 1986.

organizaciones sociales y sus dirigentes, que es la confianza en sus propias fuerzas. Desde junio de 1983, el movimiento sindical mexicano cree poco en sus propias posibilidades de presión y avance.

Eso no significa que no se levanten exigencias, pero a menudo disimuladas por la retórica de las burocracias sindicales, o superadas por otros sectores. En ocasión de la revisión de salarios al concluir la primera mitad de 1986, el Congreso del Trabajo, nuevamente, se abstuvo de pedir aumentos precisos y fue rebasado políticamente por la Comisión Permanente del Congreso, que consideró necesario un incremento de, por lo menos, 30%. Para subrayar su silencio, o en un gesto de humor negro, los líderes obreros dijeron que en la marcha del Primero de Mayo no habría demandas, sino expresiones de solidaridad con la política gubernamental. Sin embargo ese día abundaron las exigencias y no se registró una sola pancarta que dijera "gracias". Las demandas obreras, en estas circunstancias de crisis, tienden a ser simplemente autodefensivas: más créditos para trabajadores, fortalecimiento del ISSSTE, respeto a reglamentos internos de trabajo, escala móvil o revisión semestral de salarios en empresas donde los aumentos están sujetos a contrato colectivo, etc. La CTM ha insistido en la creación de un seguro de desempleo y en el establecimiento de la semana de 40 horas, pero ambas demandas son de aquellas que sus interlocutores ya ni siquiera toman en cuenta. La burocracia sindical no ha dejado de hacer peticiones, pero sin énfasis nuevo ni con la capacidad de presión que se requeriría para lograrlas. Da la impresión de que, así como no asisten a la Comisión de Salarios Mínimos, los dirigentes obreros se han ausentado de casi todo tipo de negociaciones laborales —de carácter nacional—, quizá para no ser corresponsables de los paliativos que se dan ante la crisis. O confiando en que, al advertirse los efectos de su ausencia, serán nuevamente requeridos.

Un vistazo al cumplimiento que han tenido otras demandas sindicales indica que tampoco en reivindicaciones de carácter general, que irían más allá de la negociación salarial, el movimiento obrero ha tenido motivos de satisfacción. En diciembre de 1982 se aprobaron enmiendas a la Constitución para que existiera un "capítulo económico", que el movimiento obrero había demandado desde, por lo menos, cuatro años antes. Sin embargo, el establecimiento de ese capítulo significó pocas modificaciones en beneficio de los trabajadores y sí, en cambio, constituyó el marco jurídico para la regimentación de la economía que buscaba establecer el nuevo gobierno. A partir de allí se dio institucionalidad al sector social que los dirigentes sindicales habían buscado desplegar en beneficio propio y de sus organizaciones, pero aspectos importantes en el funcionamiento de esa área de la economía —financiamiento, responsabilidades sociales, alcances en la producción, etc.— han quedado en la indefinición, en parte debido a la falta de una ley reglamentaria. Para los dirigentes de la CTM, el sector social, más que una forma de reorientar parte del sistema productivo, ha sido entendido como la posibilidad de desarrollar experiencias sociales —y políticas— de nuevo tipo. Un informe de la CTM consideraba, sobre ese sector: "Su carácter de opción liberadora significa que ante la crisis y el empobrecimiento derivados de las deformaciones estructurales de la economía, los obreros se inclinan por avanzar política y socialmente a través de formas de autogestión que permiten superar el desmedido afán de lucro y reivindicar las potencialidades creadoras y la iniciativa de los hombres y mujeres que producen la riqueza."<sup>4</sup> Sin embargo, esos intentos por crear relaciones de producción diferentes, pero dentro de un sistema como el nuestro, han tropezado con dificultades muy propias del capitalismo: falta de créditos, escasos canales

<sup>4</sup> *El Universal*, 9 de marzo de 1986.

de comercialización, falta de experiencia técnica. Un reporte de la misma central reconocía que si bien “es loable que existan sindicatos que fabriquen alimentos para venderlos a bajos precios, otros en cambio están metidos en negocios que no conocen ni corresponden al área de abastos.”<sup>5</sup>

En el sector social estaría una de las posibilidades más reales para una renovación, al menos en algunas áreas, del sindicalismo. No hay todavía una concepción clara, y menos aún generalizada entre la burocracia obrera, de cómo y para qué quiere el sector social. Ese nuevo espacio de relaciones sociales y de influencia sobre la economía ha sido entendido con frecuencia, simplemente, como una nueva forma de hacer negocios para los sindicatos.

Acostumbrados a métodos tradicionales para hacer política, los dirigentes sindicales no han llegado a formas modernas ni en su discurso, ni en sus relaciones entre sí y con el gobierno. A pesar de los estrechos vínculos que mantienen con movimientos obreros del extranjero y de la realización constante de seminarios y cursos de formación sindical, no puede afirmarse que existan cuadros en cantidad y con capacidad suficientes para suplir a quienes inevitablemente habrán de abandonar los mandos sindicales. El caso más complejo, y patético en este sentido, es el de Fidel Velázquez, cuya ausencia no podrán sustituir el resto de los —también en su mayoría viejos— líderes de la CTM. Las fricciones que han tenido en diversos momentos con el actual gobierno también han limitado el desarrollo de nuevas formas de relación política en el interior del sindicalismo. Al comienzo del sexenio, el gobierno federal buscó debilitar a la CTM aumentando la membresía de la CROC, aunque después desistió de ese intento. Igual que en otras ocasiones, desde el gobierno se había tenido la esperanza de alentar un sindicalismo paralelo al de la CTM, pero no en el sentido que ha desplegado la insurgencia obrera, sino de claros compromisos con las autoridades. Ese sindicalismo-oficialista-paralelo no prosperó a comienzos del actual sexenio, como tampoco funcionó cuando al inicio del gobierno echeverriista se alentaba a grupos insurgentes para constituirse en alternativa a la hegemonía cetemista.

Más adelante, parecía que la renovación moral sería extensiva al sindicalismo, lo cual perjudicaría los negocios de varios líderes (y, de hecho, se suprimieron importantes contratos que beneficiaban al sindicato de los petroleros, aun cuando, como es bien sabido, se mantienen el tráfico de influencias y el estilo autoritario que han existido en ese sindicato desde hace cuatro décadas). Algunos líderes del corte más tradicional, como Joaquín Hernández Galicia y Carlos Jonguitud Barrios —de los sindicatos petrolero y de maestros—, han expresado diferencias con funcionarios del gobierno en un tono hasta hace poco inusitado, aunque no puede asegurarse que tales discrepancias sean representativas de las diferencias que hay entre el movimiento obrero y el gobierno. Más bien, en esos casos los líderes aprovechan sus bases sindicales para buscar concesiones y posiciones políticas.

También se han observado frecuentes pugnas dentro de la burocracia sindical, que van más allá de las siempre habituales fricciones entre dirigentes. En algunas ocasiones se trata de la traducción, en el campo estrictamente intergremial, de las pugnas que ya existen entre sindicalismo y gobierno. Por ejemplo, en su afán por quedar bien con el régimen, en 1985 la Confederación Revolucionaria de Trabajadores rechazó el análisis económico (similar a muchos otros que antes había compartido) elaborado por el Congreso del Trabajo, calificándolo de “libresco y tecnocrático”. O, a comienzos de 1986, cuando el dirigente de los telefonistas Francisco Hernández Juárez estaba propuesto para presidir el Congreso del Trabajo —se decía, entonces, que era el candidato de Fidel Velázquez—,

<sup>5</sup> *El Universal*, 10 de abril de 1986.

los dirigentes de ese organismo se decidieron finalmente por un líder menos comprometido con las demandas de reforma económica, y menos distante del gobierno, Rafael Rivapalacio, del sindicato del Infonavit. (Hernández Juárez, sin embargo, quedó en la vicepresidencia del CT, cargo que había carecido de significación desde fines de los años sesenta.) Otros conflictos, como el que parecía inminente cuando la dirección del SNTE amenazó con salirse de la FSTSE, en febrero de 1986, han sido disipados a través de negociaciones internas, pero revelan pugnas cada vez más frecuentes por el liderazgo en los organismos-cúpula del movimiento obrero. Algunas de estas fricciones han sido resueltas o pospuestas en el ánimo de no debilitar más el ya muy deteriorado frente de los sindicatos mexicanos.

Después de los terremotos de septiembre de 1985, la crítica a los partidos políticos se convirtió en virtual lugar común por su escasa capacidad para organizar la movilización de la sociedad y enfrentar las consecuencias de aquel desastre. En realidad, este cuestionamiento habría que ampliarlo a otras organizaciones de nuestro sistema político, entre ellas a los sindicatos. Si las agrupaciones sindicales no son capaces, en su mayoría, de movilizarse para afrontar los más previsibles y elementales desafíos laborales, mucho menos lo son para integrarse a la sociedad en momentos drásticos. Su actuación, interna y externa, sigue siendo tan tortuosa, difícil y lenta como hace veinte, treinta o cuarenta años.

La escasa cultura política que ha padecido nuestra sociedad se reproduce en el interior del sindicalismo para vigorizar la indiferencia de los trabajadores y el autoritarismo de los dirigentes. El clientelismo y no el consenso activo, la improvisación en vez de la información o la discusión, el pragmatismo sobre los principios, son frecuentes en nuestro movimiento obrero, así como lo son, en términos generales, en el sistema político del país. El discurso político de los dirigentes no pasa de ser elemental —a veces incluso en las direcciones nacionales de los sindicatos—, simplemente porque no han tenido necesidad de perfeccionarlo y volverlo algo más elaborado. La movilización de los sindicatos, que siempre, en todas partes del mundo, es esporádica y supeditada a altibajos, en México es todavía más infrecuente, fuera de las conmemoraciones rituales. A los sindicatos mexicanos, como ya se anotó antes, simplemente les había hecho poca falta la práctica de movilizarse y luchar por sus derechos (nos referimos, por supuesto, a las constantes mayoritarias en el sindicalismo y no a las luchas difíciles, a menudo heroicas, de aquellos destacamentos que han sido, precisamente, excepción dentro del movimiento obrero). De la misma manera, a los trabajadores les ha tenido sin cuidado la participación en política o aun el hecho de encontrarse obligatoriamente afiliados al partido gubernamental. Quienes se preocupan más por esta circunstancia son los dirigentes —que negocian con ella— o los analistas políticos que se irritan por la falta de democracia que implica la afiliación forzosa (o “militancia colectiva”, como prefieren llamarla los líderes de la CTM).

La afiliación efectiva de los trabajadores a partidos políticos resulta en realidad poco significativa (aunque en este como en otros asuntos sea imposible contar con cifras confiables). Lo verdaderamente importante no es que se diga que los ferrocarrileros están adheridos masivamente al PRI, sino el hecho de que han votado y siguen votando por ese partido, y el hecho de que las convicciones políticas de los trabajadores tienen poca relación con su militancia sindical. La influencia de los partidos, sus propuestas, sus demandas, el efecto electoral que suscitan no han transitado, o lo hacen escasamente, por los sindicatos. Aunque hay un perceptible proceso de politización en algunos sectores de la sociedad mexicana —revelado, aunque sea insuficientemente, en los resultados electorales de los últimos años que indican un mayor juego de partidos—, no puede considerarse que tal proceso haya logrado involucrar a los sindicatos y a los trabajadores sindicalizados.

Una excepción a ese apoliticismo podría encontrarse en las elecciones recientes en varios estados. Es sabido que uno de los resortes principales para inclinar en favor del PRI la votación en Chihuahua, en julio de 1986, fue la participación de miembros del sindicato de maestros (SNTE) tanto de esa entidad como de otros sitios. Los "promotores del voto", como se llamó a esos trabajadores de la educación, eran en realidad comisarios que apremiaban a los ciudadanos para acudir a las casillas y, eventualmente, supervisaban la manera de sufragar. Un año antes, en las elecciones federales, se dijo que en estados como Veracruz y Tamaulipas, donde el sindicato petrolero tiene conocida influencia, los miembros de esa agrupación habían depositado su voto uninominal por el PRI, pero el plurinominal, para diputados de minoría, lo habían orientado en favor del Partido Socialista de los Trabajadores. Así lo indicaron, al menos, dirigentes de este partido y del sindicato, aunque algunas estimaciones electorales indican que no ocurrió necesariamente así. Estaríamos, en los dos ejemplos mencionados, ante un uso político de los trabajadores de la educación y petroleros, pero no frente a una mayor politización, puesto que esas prácticas no las deciden ellos sino los caciques que regentan sus sindicatos.

En general puede afirmarse que las preocupaciones estrictamente políticas, más allá de las implicaciones que en esa dirección pueden tener las demandas económicas o laborales, han estado alejadas del movimiento sindical. Esto vale tanto para las burocracias nacionales como para los grupos insurgentes. En los manifiestos obreros de la última década es difícil hallar referencias a cuestiones que rebasen el ámbito gremial, como por ejemplo las electorales. Cuando comenzaba a perfilarse la reforma política lopezportillista, la CTM se opuso —aunque luego rectificó y dijo que apoyaba esa medida, en la que encontraba posibilidades para que aumentara la representación obrera en el Poder Legislativo. Es decir, los cetemistas —y junto con ellos dirigentes de otras centrales— no han visto en esos cambios la oportunidad para que surjan y se expresen nuevas fuerzas políticas, sino para que sus propias posiciones aumenten. Incluso los documentos de mayor importancia programática del sindicalismo, cuando se refieren a la reforma política, lo hacen sin precisar medidas para profundizarla.<sup>6</sup>

En el campo del sindicalismo independiente ocurre casi lo mismo. Las transformaciones políticas de carácter general no han preocupado, de manera singular, a los dirigentes. La *Declaración de Guadalajara* de los electricistas democráticos fue eje de movilización y alianzas en los años setenta por su capacidad para sintetizar demandas laborales y de carácter económico, pero no se ocupaba de sugerir otro tipo de modificaciones. En buena medida, ésa era la concepción que sobre el cambio político en el país tenían los dirigentes de dicho movimiento: hay que democratizar al sindicalismo, decían, pues allí se encuentra la parte más atrasada y corrompida del sistema mexicano. A partir de esa renovación será posible modificar la correlación de fuerzas en el Estado, democratizándolo, apuntando su orientación progresista, y entonces podrá suscitarse una renovación general del país, consideraban movimientos de insurgencia como el de los electricistas. Más adelante, el desarrollo del país indicaría que los sectores que necesitan renovarse son muchos más y que muy difícilmente una reorientación nacional puede provenir solamente del sindicalismo. Recientemente otro tipo de agrupamientos independientes también ha destacado las demandas económicas sin atender espacios del quehacer político como las elecciones. Es el caso, entre otros, de la Mesa de Concertación Sindical, que ha tenido una activa

<sup>6</sup> Así ocurre, por ejemplo, en el "Manifiesto a la nación. Por una nueva sociedad" de los legisladores del sector obrero del PRI, del 30 de octubre de 1979.

presencia gremial durante 1986. Cabe decir que, por supuesto, las organizaciones sindicales tienen actitudes, siempre, naturalmente políticas. Cualquier petición salarial o cualquier esfuerzo para que no se cierren fuentes de trabajo son políticos, sobre todo en momentos de crisis. Pero al no lograr avances significativos y por no demostrar mayor beligerancia, esas agrupaciones, y sus demandas, tienden a perder efecto. Se neutralizan. Se despolitizan.

El auge de partidos conservadores, de derecha, ha sido excelente ocasión para que la burocracia sindical se autorreivindique como defensora de la Revolución. En su cincuentenario, la CTM manifestó: "El movimiento obrero organizado advierte y la CTM da el grito de manera rotunda que está en marcha una ofensiva de círculos derechistas y reaccionarios, tendientes a transformar la crisis económica en crisis política y social, liquidar la democracia y conducirnos a una etapa de retroceso y de servidumbre de la nación ante las fuerzas del exterior."<sup>7</sup> Pero ese grito de alerta no se acompaña con sugerencias para revitalizar al sistema político, que sería la única manera eficaz para defenderlo de las acechanzas que denuncian los cetemistas. La táctica de la CTM para mantener y eventualmente ampliar su influencia es, paradójicamente, la quietud. Hasta hace algunos años, cada vez que trataba de presionar al PRI, Fidel Velázquez anunciaba que podría formar otro partido, que sí fuera de trabajadores. Recientemente ha abandonado esa práctica, para erigirse en defensor de la ortodoxia priista. Así puede explicarse cómo, al mismo tiempo que levanta un programa de reivindicaciones avanzadas para la economía, la CTM postula el inmovilismo en el campo de la política. Con motivo de la reforma política anunciada por el gobierno a mediados de 1986, ha manifestado que la convocatoria para que se discuta el sistema electoral "no puede considerarse en este momento, *ni en cualquier otro*, como una respuesta positiva a la necesidad de superar la vida política de la nación".<sup>8</sup> La CTM, aunque insiste en que la izquierda no debe molestarse por su actitud, ha dicho que "rechaza terminantemente cualquier intención de aumentar la presencia de las minorías en los órganos del Poder Legislativo". De esta manera, los dirigentes cetemistas buscan seguir siendo punto de referencia indispensable para el gobierno. No hacen falta cambios, con nuestro apoyo basta para atajar a la derecha, indica el discurso entre líneas de los dirigentes.

Pero ese vaivén entre los principios y el pragmatismo seguramente tiene límites, aunque éstos no son claros todavía. En su intento por promoverse, pero sobre todo por asegurar espacios en los ámbitos en donde se ventila la política real, la dirección de la CTM ha establecido relaciones cordiales con la empresa Televisa. En 1984 suscribieron un convenio de colaboración mutua, menos publicitado pero de mayor eficacia que los homenajes que ha brindado a la misma empresa el dirigente de la CNC, el senador Marco Hernández Posadas.<sup>9</sup>

Durante mucho tiempo, tanto en el discurso de los dirigentes sindicales como en las buenas intenciones de la izquierda, se ha pretendido que el movimiento obrero no sólo es el núcleo organizado capaz de llevar al cambio social, sino que además, por su inserción proletaria y por su capacidad de alianzas, representa el bloque histórico que conforman las mayorías. Sin embargo, la diversificación de la sociedad, junto con la debilidad del sindicalismo, van dejando atrás esa creencia. Sin duda alguna, en México los sindicatos representan al sector organizado más amplio de la sociedad. Su membresía es mayor

<sup>7</sup> *El Universal*, 26 de febrero de 1986.

<sup>8</sup> Documento de la CTM elaborado a fines de julio de 1986; cursivas nuestras.

<sup>9</sup> El homenaje de la CNC a Televisa fue descrito en *Proceso*, núm. 497, 12 de mayo de 1986.

que la de los partidos políticos y más eficaz que la de las agrupaciones campesinas. Pero su discurso, aunque pretende ser de y para las mayorías, no siempre recupera el interés de aquéllas ni consigue ser suficientemente representativo de lo que dicen y quieren las bases sindicales.

Hay una creciente importancia de las llamadas clases medias a las que el sindicalismo no logra representar, aunque hay dos incursiones entre ellas. Hasta hace poco todavía podía haberse esperado que los hijos de trabajadores, nacidos en los años cincuenta o sesenta, y formados en un ambiente urbano —a diferencia de la formación campesina que tuvieron muchos de sus padres—, hubieran conformado un nuevo proletariado, en el cual estuvieran arraigadas las prácticas y las demandas de la clase obrera. Pero aquellos hijos de obreros, en una medida nada despreciable, han conformado nuevos sectores. Muchos asalariados ya no se consideran a sí mismos y a sus familiares como “trabajadores” o como “obrerros”, sino como “empleados” o “funcionarios”.<sup>10</sup> Incluso en las universidades, donde hubiera sido previsible que esa distinción retórica no fuera necesaria, los sindicatos tuvieron que autodenominarse como “de trabajadores y empleados” para significar el distanciamiento entre el trabajo manual y el de oficina. Los nuevos trabajadores o empleados, si bien afiliados a sindicatos, están formando una tradición diferente a la que ha tenido el movimiento obrero. Pueden estar dispuestos a pelear por reivindicaciones laborales, pero no necesariamente a considerarse como parte de la clase obrera, ni solidarios de otros gremios. Incluso entre sus dirigentes tiende a forjarse un discurso cuidadoso, del que se excluyen referencias a la retórica tradicional de los sindicatos. En una entrevista por televisión, pocos días antes de la conmemoración del Primero de Mayo de 1986, el dirigente del sindicato del Seguro Social (quien poco antes fuera presidente del Congreso del Trabajo), el médico oculista Mateo del Regil, aseguraba que no habría disturbios en la marcha: “vamos a desfilar como gentes decentes que somos”, aclaró.<sup>11</sup> En esa “desproletarización” de los trabajadores, los medios de comunicación, con la televisión por delante, han desempeñado una tarea notoriamente eficaz.

Las clases medias son, posiblemente, el principal actor social de nuestros días, y su papel no es precisamente progresista. En el sindicalismo se ha mantenido un alejamiento casi constante entre las organizaciones con esa membrecía y el resto del movimiento obrero. La FSTSE, que reúne a los empleados públicos, pertenece al Congreso del Trabajo pero también a la CNOP. Los trabajadores bancarios quedaron adscritos a la misma CNOP. Los universitarios se han mantenido fuera del Congreso del Trabajo.

El movimiento obrero parece no haber advertido estas novedades, de la misma manera que parece seguir impávido ante la necesidad del país de modernizarse. No se conocen proyectos serios (más allá de la declaración esporádica) de los dirigentes sindicales para afrontar la reconversión industrial que podría necesitar el país; tampoco para responder a los desafíos que ya ha comenzado a significar la modernización tecnológica. Incluso un sindicato tan alerta a los cambios como ha sido el de los telefonistas, respondió con tardanza, y aparente sorpresa, a la introducción de la tecnología digital, que significa urgencia

<sup>10</sup> Raymundo Williams escribe: “Clase trabajadora, para mucha gente, no es sino un recuerdo de la pobreza, las malas viviendas, la inseguridad, mientras que *clase media* es otra forma de indicar dinero para gastar, mejores casas y una vida más cómoda y controlable. Dado que los estilos de vida de toda la sociedad están, de todas maneras, cambiando, es fácil que este contraste señale una diferencia entre el pasado y el presente: *clase trabajadora* es el viejo estilo, del cual la gente se aleja continuamente; *clase media* es el nuevo estilo *contemporáneo*.” En *Hacia el año 2000*, Barcelona, Crítica, Grijalbo, 1984, p. 75.

<sup>11</sup> Declaraciones a Imevisión, el 29 de mayo de 1986.

de capacitación para operar los nuevos sistemas. Sectores importantes en las cúpulas patronales han considerado que los sindicatos deben democratizarse para "trabajar de común acuerdo y armonía".<sup>12</sup> Otros, menos cautos, han demandado "la destrucción de centrales como la CTM y la CROC, que han sido prostituidas por la corrupción y la politización".<sup>13</sup>

Un programa eficaz para que el movimiento obrero estuviera en aptitud de responder a los retos de hoy, y del futuro inmediato, seguramente tendría que tomar en cuenta los nuevos cambios en la sociedad, la economía, la tecnología, las relaciones políticas. Pero los actuales dirigentes no han ofrecido muestras de estar en capacidad, ni con interés, para encabezar el diseño de tal propuesta. Hasta ahora, y durante los últimos ocho años, se han conformado con reiterar su programa de reformas económicas que, al no ser actualizadas o matizadas de acuerdo con las nuevas circunstancias del país, tienden a convertirse en una serie de propuestas ideales, o maximalistas, con escasas posibilidades de prosperar. No hay un programa sindical para salir de esta crisis. Demandar la moratoria de la deuda por ejemplo, como insistentemente lo hace el movimiento obrero, no parece ser suficiente para enfrentar los múltiples retos de hoy. El horizonte posible, y necesario, no se agota allí. Si bien esa perseverancia puede ser muestra de convicción en sus propias banderas, también indica falta de ganas, o de aptitud, para buscar nuevas propuestas que, a partir del sindicalismo, pudieran involucrar a otras áreas de la sociedad. Fidel Velázquez se limita ahora a reiterar una significativa queja: "Nadie nos escucho", cuando se le pregunta por qué sus propuestas económicas no han prosperado.<sup>14</sup>

Un esfuerzo importante, pero aún insuficiente, para delinear un programa obrero más actual se produjo en la V Reunión Nacional Económica de la CTM, a fines de julio de 1986. En la relatoría de ese encuentro, a diferencia de otras reuniones, se incluye una propuesta de nueva política económica para el corto plazo, que plantea una estrategia distinta a la gubernamental para el pago de la deuda (dando preferencia a los requerimientos internos) y una reactivación en la demanda y el mercado interno a partir del mejoramiento de los salarios. Sin embargo, no se precisan formas ni montos de aumentos salariales (sólo se repite la ya vieja demanda del "salario remunerador" que, por ambigua, ha acabado por no significar nada) y se sugiere aumentar el gasto público, aunque sin especificar de dónde saldrían los recursos para ello. A final de cuentas, el programa de la CTM vuelve a la exigencia, indudablemente justa, pero a estas alturas imprecisa, de suspender o reducir el pago de la deuda externa. Paradójicamente, en los mismos días en que se realizaba esa reunión, las autoridades hacendarias del país suscribían una nueva renegociación de la deuda. El de la CTM fue, así, un foro paralelo al que constituían las declaraciones en favor de esa medida gubernamental. Y como nunca, la central obrera quedó relegada a un papel virtualmente contestatario. Probablemente por eso las conclusiones de la reunión fueron escasamente conocidas. No se les dio publicidad (y la que tuvieron, fue muy poca) hasta que, días después, se las entregaron al presidente de la República. Entre otras omisiones importantes, en esa relatoría cetemista no se menciona, en absoluto, a los empresa-

<sup>12</sup> Bernardo Ardavín, dirigente de la Coparmex, en *Excelsior*, 23 de abril de 1986.

<sup>13</sup> Guillermo Ferrer Veraza, coordinador de Estudios y Relaciones Industriales de Coparmex, en *La Jornada*, 13 de marzo de 1986.

<sup>14</sup> *El Universal*, 11 de junio de 1986.

rios. Los dirigentes sindicales insisten en que la rectoría del Estado y la reorientación del país deben consolidarse con la participación obrera, pero del otro actor de nuestra economía, que es la iniciativa privada, nada se comenta. Es, en este sentido, un programa, todavía, sin el realismo ni la eficacia que requiere la crisis de nuestros días.<sup>15</sup>

En buena medida, al movimiento obrero le afecta la inmovilidad que experimenta casi toda la sociedad, lastrada por su propia historia y, por añadidura, aturdida en la crisis. Para seguir constituyendo un actor social de relevancia en los albores del 2000, el sindicalismo tendría que reconocer que muchas cosas han cambiado, y cambiar en consecuencia. Pero casi cualquier modificación en el interior de su estructura, y en sus prácticas, tendría que pasar por una mayor participación de los trabajadores, es decir, por la ampliación de la estrecha democracia que allí, hasta ahora, ha existido. Y una democratización, aunque fuera parcial, del sindicalismo tendería a afectar todavía más sus relaciones con los grupos gobernantes: afectaría el pacto histórico —deteriorado ya por otras circunstancias— merced al cual los sindicatos son apoyo necesario del gobierno. La otra posibilidad es una renovación en las burocracias sindicales: que se volvieran más modernas, agresivas, propositivas. Pero para ello tendrían que animarse a hacer política fuera de los marcos estrictamente estatales, y no parecen contar aún con tal audacia. Una variante de esa renovación podría ocurrir simplemente a partir de un nuevo acercamiento con el gobierno, pero en los términos en que se encuentra la crisis es difícil pensar que sea factible. La carencia de opciones la ejemplificó claramente el presidente del Congreso del Trabajo en agosto de 1986: la situación creada por la crisis, reconoció, es tan grave “que los líderes no sabemos cómo atajarla”.<sup>16</sup> Y seguirá siendo grave, de acuerdo con los pronósticos menos pesimistas. Aun si la economía mexicana pudiera recuperarse en el transcurso de los próximos seis u ocho años, los niveles de bienestar de los trabajadores mexicanos serían inferiores a como se encontraban a comienzos de los ochenta. La posición de la burocracia sindical, arrinconada hoy como nunca antes, seguiría siendo de extrema fragilidad, presionada por un lado por una clase política que ya no la considera interlocutora inevitable y, en el otro flanco, por los propios trabajadores.

Transitar hacia la democracia mexicana, en estas condiciones, supondría avanzar por vías simultáneas y complementarias: profundizar el pluralismo en la representación política, democratizar las organizaciones gremiales, abrir nuevos espacios de participación en ámbitos a donde no han llegado el sindicalismo o los partidos, reorientar la economía. Todavía existe la posibilidad de que, a pesar de las instrucciones dictadas de Wall Street, el desarrollo mexicano tuviera un nuevo esquema, determinado por los requerimientos sociales: crecer para adentro (satisfaciendo urgencias sociales domésticas) y no hacia afuera, podría asegurar de nuevo estabilidad social y futuro menos incierto. Pero en todo caso requeriría que, junto con los cambios en la economía, se reconociera que las relaciones entre sociedad civil y política, así como el interior de ambas, tienden a cambiar, con o sin solución a la crisis.

Para que el país funcione y no deje de ser nación se necesitan sociedad e instituciones participativas. Pero para que éstas participen, sin enfrentarse al sistema político en actitudes de colisión, se requieren nuevos acuerdos internos. No es gratuito que varios

<sup>15</sup> El texto completo de este documento apareció en el periódico *CTM*, del 4 de agosto de 1986.

<sup>16</sup> *La Jornada*, 11 de agosto de 1986.

dirigentes sindicales manifiesten que se necesitan reformas no sólo en la economía, sino en la relación entre gobierno y movimiento obrero.<sup>17</sup> Pero un *nuevo pacto* exigiría, como cualquier refrendo de alianzas, compromisos mutuos, satisfactorios para ambas partes. Y no se ve cómo, en la estrategia actual del gobierno, haya espacio para medidas que beneficien y tranquilicen a los trabajadores y sus dirigentes. Posiblemente entonces la solución a dilemas como éstos se encontrará, simplemente, en la profundización de la lucha política: que afloren posiciones, diferencias, contradicciones, propuestas. Si no recuperara la vocación de quehacer político con la agresividad y potencialidad que tuvo en los años treinta, el sindicalismo quedará rezagado por nuevas fuerzas, y no precisamente de signo progresista.

Uno de los muchos contrasentidos del sistema mexicano ha sido la ubicación equívoca del sindicalismo. Éste, con su CTM a la cabeza, ha sido parte del Estado, una vez que ha constituido una de las instituciones del versátil entramado a través del cual se ejerce el poder político en nuestro país. Pero al mismo tiempo, por su membrecía y por el tipo de reivindicaciones que inevitable —aunque a veces tímidamente— debe levantar, es parte de la sociedad. Al estar obligado con el Estado, el sindicalismo modera o incluso deja de presentar demandas. Al tener compromisos con los trabajadores, los tiene con un segmento fundamental de la sociedad.

Si el Estado moderno es, como explicaba Weber, el monopolio de la fuerza legítima,<sup>18</sup> en esa relación estaría ocurriendo que unos ejercen la fuerza y otros la legitiman. Nos preguntamos si, en la vinculación gobierno-Estado-movimiento obrero podrá mantenerse el equilibrio histórico que hasta ahora hemos presenciado, o si la crisis obligará a nuevos estilos de relación política.

<sup>17</sup> Por ejemplo, Francisco Hernández Juárez "propuso la firma de un pacto político con el Estado que haga concursar a la sociedad civil (encabezada por el movimiento obrero) y que se anticipe a las circunstancias de desequilibrio económico que pueden crear una situación de gran potencial hacia el estallido social". Nota de Sara Lovera, en *La Jornada*, 17 de julio de 1986.

<sup>18</sup> "El Estado es aquella comunidad humana que en el interior de un determinado territorio [...] reclama para sí (con éxito) el monopolio de la coacción física legítima." Max Weber, *Economía y sociedad*, México, Fondo de Cultura Económica, 1984, p. 1 056.